**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA**

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo.
Pereira, agosto doce de dos mil veintidós
Expediente: 66682310300120210023601
Proceso: Acción Popular - rampa
Demandante: Gerardo Herrera
Coadyuvantes: Mario Restrepo
Cotty Morales Caamaño
Demandado: Vibiana Alejandra Gómez Galeano
Propietaria de Denticity
Santa Rosa de Cabal
Sentencia No. SP-0081-2022
Acta No.: 381 de agosto 12 de 2022

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentenciadel 17 de enero de 2022, proferida por el Juzgado Civil del Circuitode Santa Rosa de Cabal, en esta acción popular que **Gerardo Herrera** tramita frente a **Vibiana Alejandra Gómez Galeano**, propietaria del establecimiento de comercio Denticity.

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

Expone el demandante que la demandada tiene un establecimiento de comercio abierto al público, ubicado en la carrera 14 No. 18-26, local 3, de Santa Rosa de Cabal donde ofrece sus servicios

sin garantizar la accesibilidad para ciudadanos que se movilicen en silla de ruedas¹.

1.2. Pretensiones

Pidió la protección de los derechos contemplados en los literales d, l y m del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, y que se ordene a la accionada construir, en un término *“no menor”* de cinco años, una rampa que permita el acceso al establecimiento de la población referida, sin afectar el espacio público². Allí manifestó que desistía de las costas respecto del particular, y que las mismas debían estar a cargo del municipio, lo mismo que el incentivo. También reclamó la publicación de un extracto de la sentencia en *“prensa nacional”*.

1.3. Trámite

Admitida la demanda³, se dispuso la vinculación del Personero Municipal de Santa Rosa de Cabal, el Procurador Regional de Risaralda y el Municipio de Santa Rosa de Cabal a través de la Secretaría de Planeación; además, se ordenó la notificación del demandado y el Defensor del Pueblo.

La demandada guardó silencio⁴. En tiempo, el Municipio de Santa Rosa de Cabal, se pronunció frente a los hechos y propuso la excepción previa de falta de jurisdicción⁵.

Por otro lado, se aceptaron las coadyuvancias de Mario Restrepo⁶ y Cotty Morales Caamaño⁷.

¹ 01PrimeraInstancia, arch. 02

² Ibídem, p. 2

³ Ib., arch. 06

⁴ Ib., arch. 16

⁵ Ib., arch. 13

⁶ Ib., arch. 12

⁷ Ib., arch. 32

1.4. Sentencia de primera instancia.

Se profirió el 17 de enero de 2022⁸. En ella se negó la excepción propuesta por el municipio, se amparó el derecho colectivo reclamado y ordenó a la demandada la construcción de una rampa que permita el acceso de las personas que se movilizan en sillas de ruedas en sus instalaciones.

Para arribar a esas determinaciones, hizo referencia, en primer lugar, a la excepción de falta de jurisdicción, que negó, por cuanto el accionado directo es el propietario del establecimiento de comercio y no el municipio, que es solo vinculado.

De conformidad al artículo 97 del Código General del Proceso se dio aplicación a la presunción de veracidad, puesto que la demandada guardó silencio; además, las pruebas demuestran la omisión endilgada, pues de acuerdo con el concepto técnico allegado, una persona en silla de ruedas tiene dificultad para acceder al establecimiento de comercio.

Referente al daño, indicó que, *"tratándose de acciones populares, el daño no tiene que ser cierto sino que puede ser potencial, se trata de un daño contingente, esto es, que puede suceder o no, basta con que exista una amenaza para que se configure este presupuesto"*. Y en relación con el nexo causal señala que, *"la omisión en la que incurre la accionada es la causante de la amenaza del derecho colectivo referenciado en el párrafo anterior, que afecta a un grupo poblacional de espacial protección constitucional, la falta de garantía en la accesibilidad al consultorio odontológico, les impide a este grupo poblacional acceder a los servicios que ofrece la accionada en igualdad de condiciones que el resto de las personas"*.

Finalmente, negó el incentivo y las costas procesales

⁸ Ib., arch. 51

solicitadas, el primero porque la norma que lo reglaba se encuentra derogada; y las segundas, el actor popular desde el escrito de demanda renunció a ellas y en cuanto a las costas a cargo del Municipio tampoco *"...es procedente pues la calidad que este ostenta en el proceso es la de "vinculado"..."*. Por otro lado, en *"...lo que respecta a la orden de publicar la sentencia, ello es procedente en las acciones de grupo, según lo estipula el artículo 65 de la ley 472 de 1998"*.

1.5. Apelaciones

Apeló el actor popular, quien manifiesta que ha debido condenarse en costas el municipio, porque ha permitido que se vulnere el derecho colectivo protegido. Adicionalmente, solicita que se fije el monto de la póliza que debe prestar la accionada.

En esta instancia se presentaron escritos por parte de Cotty Morales, persona que no interpuso recurso alguno⁹, y de Gerardo Herrera que pide se cumpla con lo previsto en el art. 37 Ley 472 de 1998¹⁰.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Concurren los presupuestos procesales y no se advierte causal de nulidad que afecte lo actuado, por lo que la decisión será de fondo.

2.2. El interviniente está legitimado, ya que la acción popular puede ejercerla cualquier persona natural o jurídica, por sí misma, o por otro que actúe a su nombre, como se establece en los

⁹ Archivo 11

¹⁰ Archivo 15

artículos 12 y 13 de la Ley 472 y lo han precisado las altas Cortes, según puede consultarse en sentencias de constitucionalidad como las C-215 de 1999, C-377 de 2002, C-230 de 2011; o, como criterio auxiliar, en sede de tutela por la Corte Suprema, ejemplo de lo cual es la sentencia STC14393-2015; o en la vía contencioso administrativa, tal cual se aprecia en sentencias del 31-10-2002 y 13-02-2006, C.P. Ricardo Hoyos D., expediente 2000-1059-01 (AP 518) y Germán Rodríguez V., expediente 2003-00861-01 (AP). Los coadyuvantes también se encuentran legitimados en virtud de lo establecido en el artículo 24 ibidem. Esto por activa.

Y por pasiva igual, por cuanto la demandada, Vibiana Alejandra Gómez Galeano, es la propietaria del establecimiento de comercio Dentiality, y a ella se le imputa la amenaza.

2.3. De la demanda puede inferirse que lo que se busca es la preservación para la población en silla de ruedas, de su derecho de movilidad, con fundamento, principalmente, en lo reglado por el literal m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998 que establece como interés colectivo *"La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes"*.

2.4. El problema jurídico consiste en definir si se revoca la negativa de acceder al incentivo y de condenar en costas al municipio, sin que ello se convierta en obstáculo para analizar de manera general la acción constitucional y el derecho colectivo invocado.

2.5. Bastante se ha dicho que la acción popular fue introducida a nuestra Constitución Política en el artículo 88 y posteriormente desarrollada por la Ley 472. Su objeto, según el artículo 1°, es el amparo de los derechos colectivos, que se caracterizan, porque su titularidad la tiene la comunidad en general, en cuanto son indivisibles

(Sentencia C-569-04). Tal normativa prescribe, en el artículo 2º, que se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Además, se puede interponer contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos, según el artículo 9º de la Ley).

Por tanto, son supuestos de la misma (i) Una acción u omisión de la autoridad o el particular; (ii) La existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, (iii) La relación causal entre la acción u omisión y la vulneración o amenaza de tales derechos e intereses, que deben ser acreditados, como establece el artículo 30 de la Ley, por el demandante, salvo que exista imposibilidad para ello.

Ha explicado esta Corporación, desde hace tiempo, en sentencia del 18 de mayo de 2018, radicado 2016-00595-02, y lo reiteró en la sentencia del 17 de junio de 2020, radicado 2019-00326-01, ambas con ponencia del Magistrado Duberney Grisales Herrera, en tesis que ha sido acogida por esta Sala¹¹, como la Corte Constitucional en la sentencia C-215 de 1999 aclaró que la acción popular reviste carácter público *"(...)en cuanto "... se justifica que se dote a Los particulares de una acción pública que sirva de instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión, bien de dirimir los conflictos que pudieren presentarse, bien de evitar Los perjuicios que el patrimonio común pueda sufrir"; también restitutorio, puesto que propende por "(...) el*

¹¹ Sentencia del 28 de mayo del 2018, A.P. 2016-00586-01 y las que le fueron acumuladas; sentencia del 1º de agosto del 2018, A.P. 2016-00309-02; sentencia del 24 de agosto de 2020, A.P. 2018-00032-01, a la que fueron acumuladas otras catorce.

restablecimiento del uso y goce de tales derechos e intereses colectivos"; esto, además de su naturaleza preventiva. "(...) que significa que no es ni puede ser requisito para su ejercicio, el que exista un daño o perjuicio de los derechos o intereses que se busca amparar, sino que basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca, en razón de los fines públicos que las inspiran". Carácter preventivo que reiteró en la sentencia T-176 del 2016.

2.6. Como se señaló, la demanda indica que la accionada tiene un establecimiento de comercio abierto al público carente de condiciones de accesibilidad para ciudadanos con movilidad reducida, conforme con lo reglado por el literal m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

2.7. Precisamente, la Carta Política señala en su artículo 13 que es deber del Estado proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionar los abusos que contra ellas se cometan, lo que guarda armonía con el artículo 47 de la misma obra.

Estas normas sirvieron de fundamento a la expedición de la Ley 361 de 1997, cuyo título IV se ocupa de *"las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, sea ésta (sic) temporal o permanente"* y prevé en su parágrafo que *"Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación."*

Adicionalmente, el artículo 44 se refiere al principio de accesibilidad que lo entiende como *"la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro"*

desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes". Por barreras físicas se entiende a todas aquellas "trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas", mientras que el artículo 45 enseña que "Son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidad esenciales y en particular los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal" y el 46, que "La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tomada en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios".

Más aún. El artículo 47 dispone que *"La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el Gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones... Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales."*

Así que, a pesar de que el derecho a la accesibilidad a las personas con discapacidad que consagra la ley se supeditó en buena medida a la reglamentación que el gobierno expediera sobre el particular, no por ello dejó de prever, de una vez, algunas características que debían presentar las construcciones para facilitar la movilidad de esa población, pues precisó que debían retirarse todos los obstáculos existentes, lo cual vino a concretarse luego cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, reglamentó esa ley mediante el Decreto 1538 de 2005, aplicable para el diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público. Allí, el numeral 1 del literal C. del artículo 9° dispuso que *"Al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas"*.

2.8. Desciendo al caso concreto, el juzgado encontró que el establecimiento de comercio de propiedad de la demandada, en efecto, carece de un acceso propicio para las personas con movilidad reducida, por lo que su decisión de amparar el derecho colectivo no se hacía esperar. Así fue aceptado tácitamente por ella al guardar silencio durante el traslado de la demanda, y se corroboró con la inspección realizada al alugar.

2.9. Ahora, lo que en realidad disputa el recurrente tiene que ver con el incentivo, la garantía de cumplimiento y las costas procesales.

En lo que atañe al incentivo deprecado, este argumento se cae por su propio peso, dado que las disposiciones que lo contemplaban, artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, fueron derogadas por la Ley 1425 de 2010, lo que equivale a decir que actualmente carece de regulación en aquella normativa.

En relación con la garantía, ciertamente, debe ordenarse, porque así lo prevé el artículo 42 de la citada Ley. Se dispondrá, entonces, que se otorgue una garantía bancaria o mediante póliza de seguros, por la suma de \$5.000.000,00, dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia. En este sentido se adicionará el fallo.

Y en cuanto concierne a las costas, tampoco se abre paso la alzada. Por una parte, el juzgado exoneró de su pago a la demandada, precisamente por el hecho de la parte actora haber renunciado de manera expresa a ellas, y ese aspecto de la providencia, aun si fuera equivocado, no es motivo de reparo por parte de la recurrente, que solo protesta de manera general por la omisión de imponerlas al municipio, con lo que aquella decisión ha quedado en firme, sin posibilidad de ser modificada por la Sala.

Y por la otra, en lo que atañe al Municipio, que es en lo que se soporta la crítica, ya está visto que dicha entidad territorial llegó al proceso como vinculado por cuenta del juzgado, no como la parte demandada que debe resistir la pretensión. Así que ninguna razón hay para imponerle las costas del proceso, si bien ellas recaen en la parte que ha sido derrotada, y el ente territorial en este caso no lo es.

2.10. Sin necesidad de otras consideraciones, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, con la adición respecto a la póliza de cumplimiento de la sentencia favorable que la juez, en realidad, pasó por alto.

Como quiera que el fallo de primer grado no se revoca ni se confirma en su totalidad, se abstendrá la Sala de imponer costas en esta sede, de acuerdo con lo reglado por los numerales 3 y 4 del artículo 365 del CGP.

No sobra señalar que la accionada, luego de emitido el fallo, envió información acerca de su cumplimiento, lo cual no varía esta decisión, pues ello será ventilado, si fuera el caso, en un eventual incidente de desacato.

3. DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Sala Civil –Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia del 17 de enero de 2022, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en esta acción popular que **Gerardo Herrera** tramita frente a **Vibiana Alejandra Gómez Galeano**, propietaria del establecimiento de comercio Dentiality.

Se **ADICIONA** para ordenar a la accionada que otorgue una garantía bancaria o mediante póliza de seguros, por la suma de \$5'000.000,00, dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia.

Sin costas.

Notifíquese

Los Magistrados

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS

DUBERNEY GRISALES HERRERA

Firmado Por:

Jaime Alberto Zaraza Naranjo
Magistrado
Sala 004 Civil Familia
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Duberney Grisales Herrera
Magistrado
Sala 001 Civil Familia
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Carlos Mauricio Garcia Barajas
Magistrado
Sala 002 Civil Familia
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **12d8ee097d7b98cb6514a3ae9b456f6125609d37be02293d7d37c558929cd24f**

Documento generado en 12/08/2022 11:18:17 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>